

LA SORPRESA: UNA REBELIÓN INDÍGENA AL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN

LORENZO MEYER

LO INESPERADO

EL 1° DE ENERO DE 1994 LA TELEVISIÓN transmitió las primeras imágenes de la toma de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por un movimiento armado de indígenas –el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)–, la reacción general, tanto dentro como fuera de México, fue de auténtica sorpresa. Hasta ese entonces sólo unos cuantos sabían o sospechaban de la existencia, en Las Cañadas, Chiapas, de una organización creada dentro de las comunidades indígenas de la región, dispuesta a enfrentar violentamente el orden existente en defensa de lo que consideraban sus derechos, particular pero no exclusivamente, el derecho a la tierra. Entre los que compartían ese secreto estaban el presidente de la república, los secretarios de la Defensa y Gobernación, el gobernador de Chiapas, algunos miembros de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, un puñado de periodistas y quizá los servicios de inteligencia estadounidenses. Para el gran público mexicano habían pasado desapercibidas ciertas noticias que resultaron muy significativas *a posteriori*, como, por ejemplo, el descubrimiento de dos misteriosos campamentos en 1988 y 1991 en Las Cañadas, en los ejidos San Francisco y Quintana Roo, respectivamente; la destrucción premeditada por parte de un numeroso grupo de indígenas, el 12 de octubre de 1992 –aniversario del quinto centenario del descubrimiento europeo de América–, del monumento al conquistador Diego de Mazariegos en San Cristóbal de las Casas y, finalmente, el combate de Corralchén, en mayo de 1993, entre el ejército y un grupo armado, tras el descubrimiento de otro campamento mayor que los anteriores: el de Las Calabazas.¹ Todo indica que el gobierno no quiso darse por enterado del desafío armado que un

¹ Carlos Tello Díaz, *La rebelión de Las Cañadas. Origen y ascenso del EZLN*, México, Cal y Arena, edición corregida y aumentada, 2000, pp. 213-220.

grupo indígena en una zona marginal –donde se habían dado formas de organización y protesta pacíficas pero inútiles– había decidido lanzar, justamente cuando el conjunto social mexicano estaba a punto de ingresar en el llamado Primer Mundo, tal y como lo sostenía el discurso triunfalista del presidente Salinas.

EL SENTIDO DE LA REBELIÓN

La resistencia armada contra el orden establecido es un fenómeno tan antiguo como la sociedad misma, pero la rebelión revolucionaria es algo relativamente reciente, que tomó forma al concluir el siglo XVIII –el de la Ilustración– y llegó a su apogeo en el siglo XX –uno de los periodos más violentos de los que se tenga registro. Por lo que hace a México, nuestro país vivió convulsiones revolucionarias en el siglo XIX, estrenó su siglo XX con una gran revolución social y lo despidió al concluir el año 2000 con un EZLN que mezclaba de manera muy complicada elementos revolucionarios con los tradicionales de la rebeldía indígena.

La supervivencia del neozapatismo, a lo largo del último gobierno del régimen priista, fue resultado menos de su capacidad militar y más, mucho más, del cambio en el marco geopolítico mundial –la desaparición de la Unión Soviética y de su contraparte, el anticomunismo–, y de un inteligente discurso del EZLN más un complicado juego de actores políticos y movimientos sociales. Como sea, al dejar Ernesto Zedillo el poder el 1° de diciembre de 2000, los rebeldes se mantenían en su zona, rodeados por el ejército federal pero sin haber vuelto realmente a combatir desde hacía casi seis años, y aguardando a que con el fin del antiguo régimen se pudiera reiniciar la negociación para la firma de la paz, que había permanecido estancada por años. Además del EZLN –el grupo insurgente más importante por haberse labrado un espacio político nacional e internacional muy superior a su sola fuerza militar–, estaban otras organizaciones armadas, aún más pequeñas, más ortodoxas –más revolucionarias que rebeldes– y menos dispuestas a negociar con el gobierno, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) y casi tres decenas de grupos más que decían estar aguardando el momento de actuar a favor de un proyecto alternativo de nación impulsado por la vía armada.²

² *El Financiero*, 30 de enero de 2001.

¿ANTIGUALLAS O RESCOLDOS?

El EZLN y el resto de los pequeños grupos y siglas que insistían a finales del siglo XX en emplear el recurso de las armas como medio legítimo para acelerar el cambio político y social en México, ¿eran sólo residuos sin viabilidad de un pasado superado como sugería la derecha mexicana o rescoldos que podían volver a provocar, si no el incendio, al menos sí un aumento de la presión para acelerar un cambio social y político como lo suponían tanto los insurgentes como una parte de la izquierda?

Al concluir con las elecciones del 2 de julio de 2000 los 71 años de monopolio ininterrumpido del poder por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hacía casi seis años que el EZLN había sido reconocido oficialmente como un interlocutor válido para negociar una “paz digna”; a cambio, el grupo armado había dejado de actuar como tal, se había comprometido a una tregua indefinida y, en realidad, había actuado políticamente e introducido modificaciones en sus metas iniciales. En efecto, para 1995 el objetivo declarado del neozapatismo había dejado de ser el derrocamiento del gobierno por la vía armada para construir un tipo de régimen socialista –meta que, por otra parte, había sido desde el inicio objetivamente imposible–, y sostenía en cambio que su meta era contribuir, en unión de un amplio espectro de fuerzas y actores sociales, a introducir la democracia política y presionar para transformar las deplorables condiciones de vida de las comunidades indígenas –alrededor de 10% de la población– y de casi 40% de la sociedad mexicana que vivía –y sigue viviendo– en una situación de miseria. En contraste, los otros movimientos clandestinos –todos más pequeños y con menor base social– no mantenían ninguna línea de negociación con el gobierno, aunque sus escasos pronunciamientos, y aún más escasas acciones, tampoco permitían suponer que su proyecto es la toma directa del poder y el cambio revolucionario por la fuerza, sino más bien seguir acumulando fuerza y mantenerse a la espera de que los acontecimientos les permitan actuar en apoyo de soluciones al gran problema histórico mexicano visto desde la izquierda: la siempre presente y creciente desigualdad social. Para noviembre del 2001, a un año de haber ocurrido la gran transformación del sistema político mexicano por la vía electoral, las llamadas “bases de apoyo” del EZLN en las montañas chiapanecas –históricamente, una de las regiones con los mayores índices de atraso en el país– celebraron el decimoctavo aniversario de la formación de esa agrupación, recordando al resto de la comunidad nacional que su movimiento mantenía su exigencia de una respuesta aceptable a sus planteamientos sobre la autonomía indígena, pues la ley votada por el Congreso en ese año –manufactura del PAN y el PRI– era insatisfactoria y no podía ser

el punto de partida para una negociación entre los rebeldes y el nuevo régimen y nuevo gobierno de Vicente Fox.³

EL PRINCIPIO

El origen formal del EZLN data de 1983; el lugar fue un campamento de la Selva Lacandona, con apenas media docena de efectivos de extracción tanto urbana como campesina, mestizos e indígenas. Desde luego que sus raíces no eran chiapanecas ni indígenas, sino las propias del análisis y la acción de grupos urbanos, universitarios principalmente, empeñados en conducir la evolución política de un México autoritario por una vía revolucionaria y socialista. Desde la perspectiva de los miembros de las llamadas Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) —organización surgida después de la matanza del 68, formada en agosto de 1969 en Monterrey, y algunos de cuyos cuadros, tras varios enfrentamientos con la policía y el ejército, habrían de trasladarse a Chiapas para dar origen al EZLN—, y de otros grupos de izquierda, el régimen burgués que controlaba al Estado mexicano hacía tiempo que había dejado de ser legítimo, si es que alguna vez lo había sido. En cualquier caso, el sistema de poder nacido de la Revolución mexicana se había cristalizado como una estructura antidemocrática, antinacionalista, favorable a la concentración excesiva del poder y la riqueza en un núcleo muy pequeño, corrupta en alto grado y selectivamente represora. Por todo lo anterior, los grupos revolucionarios podían y debían enfrentarla con sus propios medios, es decir, con la violencia, y en el proceso crear la conciencia revolucionaria y antiimperialista en el resto de la sociedad. El ambiente internacional de la época pareció dar sustento a esa decisión, pues el sistema mundial aún mantenía viva la bipolaridad socialismo-capitalismo y, en la zona contigua a Chiapas, la revolución había triunfado en Nicaragua y parecía tener posibilidades de hacerlo también en Guatemala y El Salvador.⁴

Cuando se formó el EZLN, ya había una experiencia guerrillera reciente en México, experiencia no exitosa pero sobre la cual se podría desarrollar un nuevo episodio. Para empezar, estaba la del grupo de Ciudad Madera, Chihuahua, que operó entre 1964 y 1965 encabezado por el profesor Arturo Gámiz; luego, los movimientos del estado de Guerrero surgidos de la Asociación Cívica Guerrerense y comandados por los también profesores

³ La llamada ley indígena fue aprobada por la mayoría del PRI y del PAN más una minoría del PRD, el 28 de abril de 2001.

⁴ Para una historia del origen del EZLN, véase Tello Díaz, *op. cit.*, pp. 67 y ss.

Genaro Vázquez y Lucio Cabañas; finalmente, todas las organizaciones urbanas que nacieron como reacción a la represión de los movimientos estudiantiles del 68 y del 71: FUZ, MAR, CAP, CACH, FRAP, etc., y desde luego el propio FLN. En todos esos los casos, las acciones fueron pensadas dentro de alguna de las variantes del esquema marxista: maoísta, castrista, guevarista, etc. Al final, casi todos pagaron una alta cuota de sangre y todos fracasaron, pero no sin antes haber contribuido a empujar el cambio político y acumular experiencia para quienes les siguieran por ese camino.

En su análisis sobre la naturaleza de la rebelión y la revolución, James Chowning Davies señala que, históricamente, lo fundamental y determinante de una rebelión nunca es la rebelión misma –la acción violenta contra la estructura de poder imperante–, sino el periodo anterior, el de las razones provenientes del entorno social y cultural en virtud de las cuales un grupo de personas decide retirarle a sus gobernantes el derecho a seguir ejerciendo el monopolio de la violencia legítima, y se lanza a la arriesgada y difícil tarea de dar forma a otra violencia y a un discurso moral alternativo para ofrecer a la sociedad una salida legítima a sus agravios acumulados.⁵ Así pues, las rebeliones y las revoluciones siempre se inician como una respuesta ética a una situación que se considera, por un lado, profundamente injusta y, por el otro, susceptible de ser modificada por la voluntad política. En el origen, el EZLN es, por tanto, un caso típico de este tipo de movimientos.

Las revoluciones siempre han sido rebeliones animadas por lo que se puede llamar una “utopía realista” –lo que buscan construir nunca ha existido, pero sus militantes consideran que puede existir–, y que en el siglo XX se intentaron lo mismo en Europa que en Asia, América y África. Desafortunadamente, el desarrollo de las pocas revoluciones triunfantes desembocó con gran regularidad en una decepción –el caso mexicano, por ejemplo–, en un fracaso redondo que a veces significa un retroceso –como las revoluciones anticoloniales de África– o en un totalitarismo muy alejado de la utopía inicial –el Gulag soviético, la revolución cultural china o el genocidio cometido por el Khmer Rojo en Camboya, por citar sólo tres casos. Como sea, en cada uno la chispa que provocó el incendio que desembocó en el intento de transformar violenta y radicalmente a una sociedad particular o a todo un sistema mundial fue, básicamente, un sentimiento de injusticia profunda y de humillación colectiva, aunado a una propuesta alternativa donde injusticia y humillación podían ser superadas de manera definitiva. Desde luego que el contenido concreto de injusticia que ha justificado la acción revolucionaria ha variado según la época y el lugar, pero

⁵ Introducción a *When Men Revolt and Why*, Nueva York, The Free Press, 1971.

siempre la afrenta se refiere a una desigualdad que no se considera “natural” sino producto del abuso del poder de los pocos en detrimento del bienestar y la dignidad de los muchos. Ése es también el origen de la decisión del grupo que en Chiapas optó por tomar como encarnación de su agravio y de lucha al jefe agrarista sureño de principios del siglo XX: Emiliano Zapata. Se trató de revivir en Chiapas la reacción armada de comunidades rurales, indígenas y pobres, contra terratenientes, caciques y estructuras de autoridad injustas y corruptas, para a partir de ahí extenderla a un México donde los agravios indígenas se podían mezclar con los de la gran masa popular e incluso de la clase media.

UNA REBELIÓN INDÍGENA POSMODERNA

Para 1983, hacía ya buen tiempo que un teórico de las revoluciones de Harvard, Crane Brinton, había dejado en claro que ese tipo de estallidos de rebelión motivados por un sentimiento de injusticia agudo no tienden a darse entre los más pobres y de vivir más tradicional, sino entre quienes, aunque del lado perdedor en la distribución social de las cargas y las recompensas, están en un proceso positivo de cambio. Y eso fue justamente lo que ocurrió con las comunidades indígenas de colonización reciente en la selva chiapaneca.⁶ Se trató de personas que desde el inicio de los años cincuenta del siglo pasado habían dejado sus comunidades tradicionales en los valles que colindaban con la selva para ya no trabajar al servicio de los finqueros y probar fortuna en un ambiente distinto –de colonización, libre de las obligaciones propias de los peones, apoyado en lo espiritual por una parte de la Iglesia católica comprometida con los pobres y todo bajo el impulso colonizador del gobierno de Luis Echeverría–, donde el peso de la cultura tradicional fue menor y mayor la posibilidad de entrar en contacto con circunstancias e ideas nuevas. Se trató de tzeltales, choles y tzotziles, mezclados entre sí y con tabasqueños, oaxaqueños, guerrerenses e incluso gente de la ciudad de México. De esa aventura surgieron poblaciones nuevas en la selva: Nuevo San Juan Chamula, Nuevo San Andrés, Nuevo Huixtán, etcétera.⁷

En México, las rebeliones indígenas tienen una historia larga, compleja y trágica.⁸ Prácticamente en todos los casos, los estallidos fueron reacciones

⁶ *The Anatomy of Revolution*, Nueva York, Vintage Books, 1965.

⁷ Tello Díaz, *op. cit.*, pp. 47-51.

⁸ Un muy buen análisis histórico de las causas y consecuencias de las rebeliones indígenas en la colonia y en el siglo XIX se encuentra en Enrique Florescano, *Etnia, Estado y nación*, México, Editorial Aguilar, 1977.

a situaciones locales y en casi ninguno hubo un intento de acabar con el sistema de dominación en su nivel más amplio —el poder del rey en la época colonial o el del gobierno nacional a partir de la independencia. La novedad de la rebelión chiapaneca de fines del siglo XX fue que, si bien el elemento étnico estaba en el centro de la organización, su proyecto tenía una aspiración nacional y ya no buscaba, como el zapatismo original, “hacer una revolución para no cambiar”.⁹ Muy al contrario, se proponía inducir cambios generales, nacionales, desde una perspectiva de izquierda, para modificar permanentemente su propia condición pero insistiendo en su derecho a mantener las formas sustantivas de la vida comunitaria indígena.¹⁰

Desde el nacimiento, crecimiento y maduración hasta la aparición pública del EZLN tuvieron lugar eventos externos fundamentales. Para empezar, el fracaso de la Unión Soviética y la desaparición del referente revolucionario internacional más importante del siglo XX. En el entorno inmediato, la Revolución cubana se transformó de avanzada de lo porvenir en un mero esfuerzo de supervivencia. En 1990 el sandinismo en Nicaragua, bajo una fuerte presión estadounidense, perdió el poder y el futuro. Para enero de 1992 hacía tiempo que había fracasado la “ofensiva final” de la guerrilla salvadoreña y su mejor opción fue la firma de un acuerdo con el gobierno para poner fin a 12 años de cruenta guerra civil. Finalmente, y justo en 1994, en Guatemala el gobierno y las guerrillas decidieron iniciar negociaciones para también cerrar el capítulo de una brutal guerra interna que ya llevaba 32 años. En suma, en América Latina, sólo en Colombia la vía armada continuaba siendo considerada viable por las FARC y ELN, aunque también en ese caso un retorcido proceso de paz mantenía la posibilidad de que fuera la negociación, y no la revolución, el resultado final del esfuerzo guerrillero más largo del continente.

La base y la conciencia indígena del EZLN resultó ser el elemento más novedoso frente al resto de los movimientos armados mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, ese hecho, combinado con el fin

⁹ La caracterización del zapatismo del estado de Morelos, de 1910, corresponde a John Womack, *Zapata and the Mexican Revolution*, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1969, p. ix.

¹⁰ El documento inicial del EZLN, la llamada “Declaración de la Selva Lacandona”, es una declaración de guerra al régimen, “dictadura de más de 70 años”; no contiene ninguna reivindicación específicamente indígena ni de “el pueblo”; no tiene día ni mes, y el año es 1993; está y firmado por la comandancia general del EZLN. Véase *La Jornada*, 2 de enero de 1994. El comunicado del 18 de enero de 1994, “¿De qué nos van a perdonar?”, firmado por el subcomandante Marcos, ya mezcla, en un discurso novedoso y bien elaborado, las reivindicaciones históricas y actuales de las clases populares en general con las específicamente indígenas, *La Jornada*, 18 de enero de 1994. A partir de ahí, ésa sería la tónica del discurso político y moral del neozapatismo.

de la Guerra Fría, el avance de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las propias acciones de las minorías indígenas dentro y fuera de México por el reconocimiento de sus derechos, crearon condiciones relativamente novedosas para la insurgencia. Aquí cabe subrayar que en 1992, al celebrarse los quinientos años del inicio de la conquista europea de América, Rigoberta Menchú, la lideresa indígena guatemalteca, había recibido el Premio Nobel. Sin embargo, fue la capacidad de comunicación del liderazgo del EZLN, su ductilidad ideológica y su uso mínimo de la violencia lo que le permitió explotar al máximo la legitimidad política creciente de las reivindicaciones indígenas. Así, los neozapatistas empalmaron su poca fuerza militar con un fuerte y muy articulado discurso en contra de la discriminación y la desigualdad, sin referencias marxistas directas, subrayando siempre el agravio histórico y haciendo constante referencia a elementos étnicos y éticos: quinientos años de explotación y discriminación de los gobiernos y las clases dominantes hacia las comunidades y la cultura indígenas, particularmente en Chiapas. Todo lo anterior se hizo llegar a México, los Estados Unidos, Europa y América Latina vía internet y la prensa internacional, que de inmediato reconoció el valor mediático del neozapatismo: sus pasamontañas, el elemento étnico, la fuerza de sus comunicados, el entorno natural, etcétera.

Lo sorprendente de lo sucedido a partir de enero de 1994 no fue sólo la rebelión del EZLN, sino el reconocimiento de los gobiernos de Carlos Salinas, primero, y de Ernesto Zedillo, después, de que repetir la respuesta tradicional frente a la insurgencia –su aniquilamiento por la vía militar– tendría un costo político interno y externo tan alto, que resultaba prohibitivo. Tras el impacto inicial, el ejército federal se rearmó y aisló totalmente la zona insurgente, en tanto que la guerrilla permaneció con sus fuerzas y armamento originales. El EZLN siempre tuvo pocos efectivos –quizá no más de dos mil–, geográficamente aislados, con armamento pobre y recursos materiales extremadamente limitados, pues sus bases sociales eran, justamente, pobres extremos. En esas condiciones no resultó extraño que el neozapatismo aceptara negociar tras apenas diez días de combate.

EL GOBIERNO DE ZEDILLO FRENTE A LA HERENCIA INCÓMODA

Hasta 1994, Ernesto Zedillo era un presidente muy improbable: economista de 43 años, con doctorado en la Universidad de Yale, uno de los varios tecnócratas con los que había conformado su gabinete Carlos Salinas, sin carrera partidista, sin grupo ni red política propios en el interior de la extensa burocracia federal y sin ligas particularmente relevantes con los gru-

pos del poder económico fuera del gobierno. Sin embargo, el asesinato en marzo de ese año de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI ya seleccionado por Carlos Salinas para sucederlo, desató una crisis y una dinámica dentro del círculo del poder. Fue esa crisis la que permitió que Zedillo, justamente por su relativo aislamiento dentro del mundo político oficial, resultase el personaje que menos rechazo despertaba entre la clase política de un régimen que se encontraba ya en una etapa de clara descomposición. Así pues, fue candidato del PRI y ganó la presidencia con apenas la mitad de los sufragios emitidos.

Entre los muchos problemas que Zedillo heredó de la administración de Salinas —una economía basada en la afluencia del volátil capital especulativo externo, una oposición crecientemente organizada, un partido de Estado dividido, una legitimidad menguante del régimen— estaba el de la “guerrilla posmoderna”, es decir, el EZLN. Para el 1° de diciembre de 1994, el primer intento de llegar a un arreglo con los rebeldes, cuyo vocero y líder más conocido era un mestizo y universitario, el “subcomandante Marcos”, había terminado en un fracaso. Un documento de 32 puntos negociado en la catedral de San Cristóbal de las Casas entre el antiguo miembro de círculo íntimo de Salinas, Manuel Camacho, y el subcomandante Marcos, en medio de una gran expectación y movilización en la ciudad de México a favor de la paz, fue finalmente rechazado por las comunidades zapatistas a las que se sometió para su discusión. En el breve lapso de poco más de diez meses —la última etapa del gobierno de Salinas— hubo tres comisionados para la paz y la reconciliación nombrados por el presidente —después de la renuncia de Manuel Camacho, los comisionados fueron Héctor Hernández y Jorge Madrazo—, pero, tras el fracaso de las negociaciones en la catedral, ninguno de los otros dos comisionados pudo avanzar en la solución del problema. A la vez, durante el *impasse*, hubo movilizaciones multitudinarias de quienes no deseaban que el problema se resolviera por medios militares, aunque también hubo pronunciamientos en el sentido contrario por parte de los sectores más conservadores de la sociedad mexicana.¹¹

El final de la Guerra Fría y la consiguiente desaparición de la política anticomunista de las grandes potencias de Occidente y Japón, ya no permitió al gobierno mexicano tratar al EZLN de la manera brutal con que durante la época de la “guerra sucia”, de los años sesenta a inicios de los ochenta, había enfrentado y acabado a los otros movimientos guerrilleros. Una movilización de organizaciones no gubernamentales (ONG) mexica-

¹¹ Un buen ejemplo de los puntos de vista de los “duros” se tiene en varias de las declaraciones al respecto del líder del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos.

nas, europeas y estadounidenses reconoció casi de inmediato la legitimidad de las demandas y los métodos de los rebeldes, y exigió un respeto a los derechos humanos sin precedentes en la historia del trato del régimen a sus enemigos.

En algún momento, un secretario de Estado de Zedillo –Miguel Ángel Gurría– calificaría al EZLN como “una guerrilla de internet”, significando con ello la poca importancia o seriedad del movimiento, pero aunque justo en su diagnóstico erró en su significado. Con muy pocos efectivos y muy mal armado, el EZLN hizo un uso estupendo de un instrumento nuevo, el internet, que le permitió ganarle al gobierno la batalla en donde más importaba: no en las selvas chiapanecas sino en la mente y la conciencia de una sociedad internacional particularmente bien dispuesta hacia las causas de las minorías indígenas y mal dispuesta hacia la prolongación de regímenes autoritarios como el mexicano.

LA NEGOCIACIÓN INFORMAL Y SU FRACASO

Tres días después de asumir las riendas del gobierno, el presidente Zedillo recibió uno de los ya famosos comunicados del subcomandante Marcos en que le daba la “bienvenida a la pesadilla”. Y atento a explotar las debilidades de un adversario fuerte –la transferencia del poder de un equipo presidencial a otro siempre crea vacíos e incertidumbre en las líneas de mando–, el 19 de diciembre el EZLN apareció pacífica y repentinamente en 38 nuevos municipios de Chiapas, a los que declaró territorios en rebeldía. Los insurgentes apostaron a que el gobierno recién instalado no respondería con violencia a lo que era una acción más política que militar, y ganaron la apuesta. En cualquier caso, la tensión aumentó notablemente en la zona de conflicto y el problema de Chiapas se colocó en el centro de la agenda del nuevo gobierno. Sin embargo, esa centralidad duró menos de una semana pues fue reemplazada por otro problema mayor, que afectaba directamente a la sociedad entera: la crisis económica. En efecto, un intento fallido por devaluar el peso artificialmente sobrevaluado –se trató de una decisión que debió haber tomado el gobierno anterior pero que, por razones electorales, se pospuso– desembocó en una repentina pérdida de confianza de los capitales especulativos extranjeros y nacionales, y el resultado fue una corrida contra el peso por miles de millones de dólares. Lo que siguió fue una devaluación mayor que la prevista, una caída del PIB de 6% en 1995 y el fin del espejismo alimentado por el ex presidente Salinas: que con el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (TLCAN), México había entrado ya en el exclusivo grupo de los países desarrollados y

modernos. Sólo la intervención directa del gobierno estadounidense impidió que México se declarara en moratoria de sus pagos al exterior y sufriera las consecuencias de verse cortado de las corrientes de crédito y capitales internacionales.

Fue justamente en un entorno de crispación política y social cuando el 29 de diciembre el EZLN anunció el repliegue de sus fuerzas de las posiciones ocupadas diez días antes y su voluntad de prolongar la tregua militar. Dando un paso adelante y otro atrás –presionando y conciliando–, el EZLN intentó mejorar su posición ante una nueva ronda de negociaciones con el gobierno federal. Y, en efecto, el presidente Zedillo, ocupado en hacer frente al enorme problema económico que se le vino encima, puso a uno de sus pocos cuadros políticos de confianza, Esteban Moctezuma, al frente de la Secretaría de Gobernación y lo nombró oficialmente encargado de reiniciar contactos con el EZLN. El joven e inexperto secretario de Gobernación puso de inmediato manos a la obra y pronto tuvo no sólo un intercambio epistolar sino un discreto pero altamente significativo encuentro con el subcomandante Marcos. Sin embargo, y en paralelo, el presidente decidió intentar también la “línea dura” contra los rebeldes. Y mediante un sorpresivo operativo militar cuyo objetivo era nada menos que capturar al subcomandante Marcos, movió al ejército. Ese operativo se llevó a cabo el 9 de febrero y estuvo a punto de lograr su cometido, pero en el último momento el jefe guerrillero, que suponía que el contacto con el secretario de Gobernación implicaba el abandono de la opción militar, apenas pudo escapar. Como resultado de esta decisión presidencial, el ejército avanzó sobre una parte de la zona zapatista y obligó a que comunidades enteras –bases de apoyo del zapatismo– tuvieran que huir a las montañas. Fuera de la zona, la policía capturó a ocho personas en Cacalomacán, Estado de México; a siete en Yanga, Veracruz; a tres en Chiapas, entre ellos a Jorge Javier Elorriaga –contacto entre el subcomandante Marcos y el secretario de Gobernación, pero al que se acusó de ser uno de los comandantes del EZLN–, y en la ciudad de México a Gloria Benavides, a quien se identificó como otra comandante zapatista. La razón de tan abrupto cambio de actitud frente a los rebeldes chiapanecos –de la negociación a la captura– fue anunciada ese mismo día por el propio presidente en un mensaje a la nación: el EZLN “estaba a punto de emprender nuevos actos de violencia” y extender el conflicto a otras partes del país.¹² Los rebeldes negaron desde el inicio la acusación y, a su vez, acusaron al presidente de un doble juego: simular negociar para, en realidad, intentar la solución militar.

¹² *La Jornada*, 10 de febrero de 1995.

En febrero de 1995 los neozapatistas simplemente no podían volver a intentar la vía armada con alguna posibilidad de éxito: el factor sorpresa había desaparecido y el ejército federal había reforzado el cerco de un grupo insurgente pequeño, mal armado y aislado del resto del país. Es más, para 1995 era ya evidente que las armas reales del zapatismo no eran los fusiles sino un discurso político que había resultado muy efectivo en la movilización de sus simpatizantes en el corazón geográfico del sistema de poder: la ciudad de México, y en los países desarrollados, en el centro de la globalización.

El resultado inmediato del fallido intento del 9 de febrero fue, por un lado, la suspensión de las negociaciones entre el gobierno y los rebeldes chiapanecos. Sin embargo, las movilizaciones urbanas a favor de una solución política del problema y la acción del Poder Legislativo —donde ya había una importante minoría opositora, y por tanto una fuerza independiente del presidente— abrieron una nueva posibilidad de solución negociada, y cuyo referente fue la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, del 11 de marzo 1995, que legitimaba al EZLN como actor político en tanto no se negara a negociar. La respuesta del gobierno a la acción del Legislativo fue un documento: las “Bases para el Diálogo y la Negociación del Acuerdo de Concordia y Pacificación”.

Con el nuevo marco legal y político, el 9 de abril de 1995 fue posible firmar un protocolo para volver a la mesa de negociaciones, aunque la desconfianza mutua complicaba aún más lo que ya era un proceso muy difícil. El desgaste del secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, como responsable de resolver el problema chiapaneco, aunado a su fracaso en el intento de lograr un acuerdo sustantivo con los partidos de oposición debido a la negativa del gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, de dejar su puesto para incorporarse a la administración federal, desembocó en la salida del gabinete el 28 de junio del hombre de confianza de Zedillo. El sustituto de Moctezuma fue un político tradicional ligado al grupo del Estado de México, Emilio Chuayffet, y el comisionado para la paz fue otro “aparato” del sistema político tradicional: Marco Antonio Bernal.

Para mediados de 1995, los actores políticos que se movían alrededor del tema chiapaneco eran numerosos y con agendas antagónicas o, al menos, diferentes. Además del EZLN y del gobierno federal, estaba un poder legislativo que empezaba a tomar iniciativas gracias a la minoría opositora, y fue con esa pluralidad como se conformó la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) prevista por la Ley para el Diálogo. La Cocopa, formada por 17 personas, contó con representantes de todos los partidos en el Congreso federal, más uno del congreso de Chiapas y otro del ejecutivo estatal. Para entonces la Iglesia católica, por medio del obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, ya era parte central del esfuerzo de inter-

mediación y desde finales de 1994 había dado forma a su propio órgano de intermediación, reconocido tanto por el EZLN como por el gobierno, el Congreso y la opinión pública: la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), encabezada por el obispo de San Cristóbal y conformada por varias figuras públicas independientes, lo que terminó por hacer odiosa a esa comisión a los ojos oficiales –y de los sectores sociales conservadores, que incluían al grueso de la propia jerarquía católica–, pero le ganó el apoyo de otra parte de la opinión pública nacional e internacional. Desde luego que las ONG mexicanas y extranjeras conformaron otro abigarrado y muy activo y vociferante grupo de actores, cuya presencia sirvió mucho de protección a los rebeldes. La prensa nacional e internacional resultó un actor por propio derecho, al difundir como nunca antes el desarrollo de un conflicto en México sin apegar-se a la “línea oficial”; el EZLN supo atraer las simpatías de un buen número de corresponsales extranjeros con una muy refinada política y, en ese campo, casi siempre le ganó la partida al gobierno.

En el otro lado del espectro, estaba el gobierno de Chiapas, donde los gobernadores se sucedieron unos a otros con gran velocidad –Javier López Moreno, hasta diciembre de 1994; Eduardo Robledo Rincón, apenas dos meses; Julio César Luis Ferro, hasta enero de 1998, y Roberto Albores, hasta diciembre del año 2000–, pero que final y naturalmente fueron instrumentos del gobierno central, especialmente para hacer las tareas más duras. Las organizaciones de propietarios de tierras chiapanecos afectados por el conflicto se convirtieron en un grupo de presión para llevar al gobierno a proteger los predios privados de las invasiones de los simpatizantes zapatistas. Finalmente, la lista de actores antagónicos al neozapatismo debe incluir a los grupos paramilitares, nutridos en buena medida por los desplazados por los rebeldes, y creados o al menos apoyados lo mismo por los propietarios de tierras que por los caciques indígenas y mestizos de la región –todos ligados al PRI–, por el gobierno estatal y, posiblemente, por el propio ejército que buscaba presionar a la guerrilla con grupos de la misma extracción cultural y social que los rebeldes.

EL FACTOR AMERICANO

La pugna entre el EZLN y el gobierno federal durante el sexenio de Ernesto Zedillo se libró en buena medida en los medios masivos de comunicación de México y del extranjero, en las calles de la ciudad de México –las simpatías multitudinarias por el EZLN no se dieron en el norte del país–, en la actividad de una multitud de ONG nacionales y extranjeras, y en una discusión intelectual que corrió más o menos a lo largo de las líneas tradiciona-

les de izquierda y derecha. En cualquier caso, la potencia hegemónica, Estados Unidos, ya no dio muestras de pretender intervenir de la manera tradicional –tomando partido por el orden establecido–, pues nunca se detectaron ligas de los rebeldes con Cuba o con otras fuerzas externas consideradas antagónicas al interés nacional estadounidense, como el narco-tráfico. Por otra parte, y aunque el discurso del EZLN correspondía al de la izquierda y sostenía una posición crítica frente al TLCAN por sus efectos negativos en la agricultura mexicana, ese discurso, cargado de elementos éticos y morales, donde se privilegiaba la democracia y no la lucha de clases, no se distinguió por el contenido antiimperialista ni por otros elementos particularmente antiestadounidenses. Es verdad que el discurso zapatista castigó de muchas formas al capitalismo neoliberal por sus efectos sobre la marginalidad, pero elaboró poco en torno a las opciones al capitalismo; su socialismo resultó de muy bajo perfil.

SAN ANDRÉS (¿LARRÁINZAR O SACAMCHÉN?)

El sitio que finalmente fue aceptado por las partes como sede permanente para el diálogo EZLN-gobierno fue San Andrés Larráinzar (terminología gubernamental) o, lo que es lo mismo, San Andrés Sacamchén de los Pobres (terminología del EZLN). Para octubre, y teniendo como telón de fondo una consulta nacional hecha por el EZLN con la ayuda de Alianza Cívica y en la que participaron más de un millón de ciudadanos, se iniciaron las negociaciones sustantivas entre los antagonistas, mediante “mesas de trabajo” –seis–, siendo la primera la correspondiente a “Derechos y cultura indígenas”, con la presencia de la Cocopa, la Conai y decenas de asesores.

Casi tan importante como las pláticas, fue el escenario en que éstas tuvieron lugar: una pequeña población en la selva con la presencia multitudinaria de bases sociales zapatistas, la policía militar desarmada, un contingente civil de ONG –que, simbólicamente, garantizaba la seguridad de los rebeldes–, los asesores y los omnipresentes medios de información mexicanos y extranjeros, y todo envuelto en una atmósfera tensa, sobre todo después de que las autoridades anunciaron el arresto en la ciudad de México de Fernando Yáñez, acusado de ser el “comandante Germán”, máximo líder del EZLN (sería puesto en libertad pocos días más tarde), y complicada por las acciones de los agentes de migración, que una y otra vez recurrían a la expulsión de aquellos observadores o religiosos extranjeros a los que acusaban de “inmiscuirse en asuntos internos”.

Al despuntar 1996, el EZLN anunció, en la IV Declaración de la Selva Lacandona, que su objetivo a mediano plazo era propiciar la construcción

de una fuerza política de amplio espectro que, por la vía legal y sin pretender alcanzar el poder –no sería, por tanto, un partido político–, movilizara a la sociedad en su esfuerzo por dar forma a un país pacífico y justo. Para febrero, tras consultar con sus bases, el EZLN aceptó firmar con el gobierno los acuerdos alcanzados sobre derechos y cultura indígenas que, finalmente, tendrían como destino su incorporación en la Constitución. Serían el marco legal del reconocimiento y autonomía de las comunidades indígenas para asegurar su supervivencia, a la vez que permitir su transformación social, económica, política y cultural.

A lo largo de ese año, en un ambiente muy crispado, donde la desconfianza entre los participantes y las acciones de violencia de organizaciones antizapatistas ligadas al PRI, como “Paz y Justicia” o “Chinchulines”, enmarcaron toda la negociación, se llevaron a cabo las discusiones de la llamada mesa 2: “Democracia y justicia”. Al lado de este proceso, los zapatistas y sus simpatizantes organizaron en la selva el llamado Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, que sirvió muy bien de caja de resonancia mundial a las demandas y posiciones del EZLN. Por otro lado, en el Congreso Nacional Indígena, que se celebró entonces en la ciudad de México, se hizo presente la “comandante Ramona” del EZLN. Mientras tanto, en Guerrero, el EPR hizo su primera aparición pública, y luego emprendería varias acciones armadas contra destacamentos del ejército y puestos de policía. La existencia de un segundo frente guerrillero en el sur y centro del país, aunque fuera más pequeño, complicó aún más el panorama en esta arena. Finalmente, la mesa 2 ya no llegaría a resultado alguno, pero, con intermediación de la Cocopa, el 29 de noviembre de 1996 ese grupo multipartidista de legisladores logró presentar, tanto al EZLN como al gobierno, una propuesta de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas basada en los acuerdos de la mesa 1 de San Andrés. El EZLN objetó algunos puntos del documento y finalmente lo aceptó, pero el gobierno de plano lo rechazó cuando el 19 de diciembre propuso modificaciones sustantivas. Los zapatistas consideraron que lo que estaba haciendo el gobierno federal equivalía a una contrapropuesta que echaba abajo el compromiso de San Andrés. Así, al final de 1996, toda la negociación había retornado al punto cero, con las partes tan separadas como al inicio del proceso.¹³

A partir de 1997, para cualquier propósito práctico, las negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN se suspendieron y todo quedó a la espe-

¹³ El voluminoso expediente de las negociaciones y acuerdos sobre derechos y cultura indígenas, así como el proyecto final de ley, se encuentran en Comisión Nacional de Intermediación, *San Andrés, mesa 1: derechos y cultura indígenas*, México, Serie “Sendero de Paz”, 2 vols., 2001.

ra de que los acontecimientos externos a la dinámica gobierno-EZLN pudieran destrabar el proceso. El discurso del zapatismo –los numerosos comunicados del subcomandante Marcos– subrayaría una y otra vez que el gobierno de Ernesto Zedillo había violado la letra y el espíritu del acuerdo al que ya se había llegado con su representante en San Andrés. Por su parte, las autoridades federales, sin negar la acusación, contraargumentarían, también una y otra vez, que avalar lo firmado en San Andrés por el comisionado o aceptar el documento elaborado por los legisladores de la Cocompa equivaldría a vulnerar el principio de la unidad nacional, pues el concepto de autonomía indígena en ambos documentos era contrario a las bases del pacto nacional.¹⁴ En esas condiciones, el comisionado Marco Bernal perdió toda su utilidad y fue sustituido por el ex gobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwell, pero éste ya no tuvo siquiera la posibilidad de encontrarse con los insurgentes y simplemente se comportó como un actor en busca de un papel; lo mismo le sucedió a quien lo sustituyó en el cargo el 12 de enero de 1998: Emilio Rabasa, cuyo título oficial reflejó ya el cambio de situación, pues de comisionado pasó a ser un mero coordinador del Diálogo para la Negociación en Chiapas, diálogo que simplemente ya no tuvo lugar por el resto del sexenio zedillista, aunque muchas otras cosas pasaron en la escena chiapaneca y nacional.

En las elecciones federales de 1997 el PRI, por primera vez en su historia, perdió el control de la Cámara de Diputados y la izquierda partidista, el PRD, se alzó con la victoria en la ciudad de México, donde su líder, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se convirtió en el primer jefe de gobierno electo de la gran urbe. El EZLN, para enfatizar su aspecto indígena, cultural y político en contraste con el militar, logró enviar a la ciudad de México una numerosa delegación indígena para participar en la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN). Esta organización, finalmente, sería víctima de pugnas internas y no habría de lograr lo que se propuso: ser la contraparte civil y política, pluriétnica y pluriclasista, del EZLN.

Al concluir 1997, las tensiones en la zona zapatista, con miles de desplazados de ambos lados y una presencia cada vez más clara de grupos antizapatistas armados (paramilitares), crecieron casi día a día hasta que finalmente llegaron a su clímax dos días antes de la Noche Buena. El 22 de diciembre, en el pequeño y mísero caserío de Acteal, un grupo armado antizapatista, casi a la vista de las fuerzas de seguridad del gobierno, asesinó, a lo largo de varias horas, a 45 personas desarmadas –hombres, mujeres y ni-

¹⁴ Al respecto, véanse las declaraciones del senador del PRI Eduardo Andrade, del 11 de diciembre de 1997, donde resume los argumentos de quienes consideraban incompatibles los principios de autonomía indígena con los de comunidad nacional.

ños-, desplazadas de su comunidad original y miembros de la organización “Las Abejas”, simpatizantes del zapatismo.¹⁵ El gobierno de inmediato se deslindó y condenó la acción, pero el escándalo, que muy pronto cobró una dimensión internacional, llevó al presidente Ernesto Zedillo a sacrificar de nuevo al secretario de Gobernación y al gobernador de Chiapas; el primero fue sustituido por Francisco Labastida –otro aparato antiguo del PRI– y el segundo, por otro de mano igualmente dura: Roberto Albores. En realidad, la crisis de Acteal, desde la perspectiva del gobierno, significó sólo el cambio de personal pero no de política.

A partir de marzo de 1998, el ejército aumentó la presión en la zona zapatista mediante lo que más de un observador calificaría como una guerra de baja intensidad. Así, en ese mes de marzo, en Taniperlas, fuerzas armadas estatales y federales desmantelaron el “municipio autónomo Ricardo Flores Magón”, y en mayo hicieron lo mismo en Amparo Aguatinta, en contra del municipio autónomo “Tierra y Libertad”; hasta ahí, lo más espectacular fueron los heridos y prisioneros. Sin embargo, en junio, en El Bosque, el choque escaló y el resultado fueron varios muertos. De nueva cuenta, el EZLN logró movilizar a la opinión pública nacional e internacional, y el gobierno encontró prudente disminuir la intensidad de la presión militar. El EZLN decidió volver a tomar la iniciativa política fuera de Chiapas, y en 1999 logró que poco más de tres millones de mexicanos participaran en una nueva consulta nacional, el 21 de marzo, en apoyo de los Acuerdos de San Andrés. Desde luego que esa nueva movilización no modificó la posición del gobierno ni de los sectores sociales conservadores sobre el particular, pero el costo de mantener la guerra de baja intensidad aumentó.

Desde fines de 1999, el centro de la atención política del grueso de los actores nacionales dejó Chiapas y se trasladó a la elección presidencial de 2000, donde el sistema priista de 71 años se enfrentaba, por primera vez, a fuerzas opositoras sustantivas. Con todos los actores políticos dirigiendo su energía a la arena electoral, el tema de la insurgencia pasó a un segundo plano y así lo entendieron tanto el EZLN como el EPR y las otras agrupaciones guerrilleras, que anunciaron su propósito de no interferir con tan decisivas elecciones. Tras la derrota electoral del PRI y el triunfo de la oposición de centro derecha el 2 de julio de 2000, resultó natural que todos los actores que habían intervenido en el conflicto que había estallado en las montañas chiapanecas el 1° de enero de 1994, aguardaran a que llegara el final del go-

¹⁵ Marta Durán de Huerta Patiño y Massimo Boldrini, *Acteal, Navidad en el infierno*, México, Times Editores, 1998.

bierno de Ernesto Zedillo y, sobre todo, el final del régimen priista. Después de todo, el ganador, Vicente Fox, como candidato había asegurado su voluntad de solucionar por la vía de la negociación, y “en quince minutos”, la insurgencia indígena. Las condiciones políticas del propio estado de Chiapas también se modificaron de manera notable, pues poco después la gubernatura sería ganada por el candidato de la oposición –Pablo Salazar Mendiguchía–, apoyado por una rara coalición de izquierda y derecha –PRD y PAN–, que había hecho de la negociación, y no de la confrontación con el EZLN, el eje de un proyecto político de reconciliación.

El gobierno de Ernesto Zedillo se inició teniendo que decidir cómo hacerle frente a un grupo insurgente “posmoderno” e indígena en Chiapas. Seis años después, al concluir, el problema creado por EZLN persistía y el gobierno había perdido la batalla ideológica, pero además, en Guerrero, Oaxaca y en otras regiones, habían surgido nuevos movimientos, con un proyecto más tradicional y donde, en principio, las acciones militares tenían mayor importancia, aunque su fuerza real no era mayor sino menor que la del EZLN.

Al tomar Fox posesión de su cargo en diciembre del año 2000, e iniciar un nuevo gobierno y un nuevo régimen –el democrático–, todas las fichas del tablero político mexicano se movieron y se abrió otra vez un escenario propicio a la negociación por la vía del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés: el envío del documento de la Cocopa como iniciativa presidencial de ley a un congreso auténticamente plural. Sin embargo, la realidad pronto se reveló mucho más complicada que como la había supuesto el optimismo despertado por el cambio de régimen; los famosos “quince minutos” para encontrar la solución de un problema con raíces coloniales se tornarían días, meses y años, pero ese desarrollo ya no corresponde al marco temporal de este trabajo, pues es, por así decirlo, harina de otro costal.

EN SUMA

Al concluir el siglo XX, la vía armada y revolucionaria en México y en el mundo, como el medio para formar el “hombre nuevo” y la sociedad justa, parecía estar agotada. Sin embargo, la rebelión misma, como medio para obligar a los poderes formales y de facto a tomar en cuenta las demandas de grupos marginados y explotados, para exigir la disminución de la desigualdad extrema y la apertura de oportunidades para los excluidos y agraviados, no desapareció. Las acciones y el discurso político del EZLN resultaron un factor importante en el conjunto de elementos que llevaron a la caída del sistema autoritario creado por la Revolución mexicana. Sin embargo,

una vez modificadas las reglas del juego para el acceso y ejercicio del poder, el nuevo régimen mexicano, democrático, se enfrentó al problema de cómo desactivar, sin violencia, un movimiento armado sobre cuyas demandas no había consenso en la sociedad, pues, mientras una parte las consideraba legítimas y aceptables, la otra las veía como una amenaza al interés nacional. De la inteligencia, voluntad y efectividad de la política gubernamental y de las acciones del resto de los actores sociales, para hacer frente a la vieja pero vigente demanda de la que se dicen portadores los movimientos insurgentes –la justicia social y el establecimiento del Estado de derecho–, dependería que el rescoldo revolucionario se apagase en el siglo XXI mexicano hasta convertirse sólo en memoria histórica o se mantuviese como instrumento de grupos marginados, lo que complicaría la de por sí difícil consolidación de la democracia.